



PERSPECTIVAS

SUPLEMENTO DE ANÁLISIS
POLÍTICO, NO. 41

MARZO 2010

El síndrome del atrincheramiento

Un mes de acontecimientos

Los acontecimientos políticos del mes de marzo despuntaron con la realización de las elecciones en las Regiones Autónomas del Atlántico. Aunque habían muchas expectativas en relación a cómo se iban a desarrollar esos comicios, también es cierto que ya se esperaban los resultados obtenidos. Efectivamente, desde el fraude electoral realizado en las municipales del 2008, las esperanzas de realizar una competencia electoral transparente durante las elecciones regionales, se fueron esfumando en la medida en que se acercaba la fecha prevista.

Además de los problemas técnicos ya señalados en ocasiones anteriores y que han sido pilares para las irregularidades electorales, la preparación de las regionales significó mayor descrédito para el CSE y puso en evidencia el carácter instrumental que estos procesos tienen para los partidos políticos nacionales, quienes extendieron su juego político hacia la Costa y no tuvieron ningún reparo en subordinar las agendas, reivindicaciones e intereses costeños a sus propios intereses personales y partidarios.

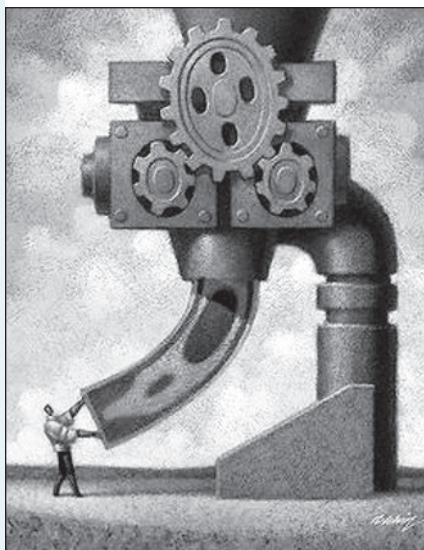
El nivel de abstención y los resultados finales anunciados por el CSE no sorprendieron a nadie, pues en realidad se repitió el mismo patrón de comportamiento que en las municipales pasadas, aunque con menos irregularidades y conflictos.

Este mismo mes se conmemoraron los 100 años del Día Interna-

Mientras el país se aletargaba en el calor y se solazaba en el feriado, la principal puja política quedó en espera hasta después de la semana santa. La renovación de los 25 funcionarios en las distintas instituciones públicas sigue empantanada mientras que el CSE se ha convertido en la trinchera más preciada considerando las próximas elecciones presidenciales, luego que las municipales del 2008 y las recién pasadas elecciones regionales en la Costa Caribe, dejaran a la institución en su punto más bajo de credibilidad y confianza.

Respecto a estas últimas elecciones, el CSE y el partido de gobierno mostraron nuevamente que las grandes falencias del sistema electoral no son gratuitas y guardan una relación estrecha con el contexto autoritario que se vive en el país. Pero además, no hicieron

más que confirmar los temores en relación a la falta de transparencia de las competencias electorales y la instrumentalización de la Costa en el interés de los partidos políticos, convirtiéndose en un amargo anticipo de lo que pueden ser las elecciones presidenciales del 2011 si no se operan cambios importantes en las instituciones estatales, especialmente el CSE.



cional de la Mujer, una fecha que marca un hito el reconocimiento de las luchas para las mujeres. En el caso de Nicaragua, el movimiento de mujeres celebró ese día con diversas actividades reclamando que cese la violencia contra las mujeres, especialmente la que el estado ejerce sobre ellas con la penalización de aborto terapéutico.

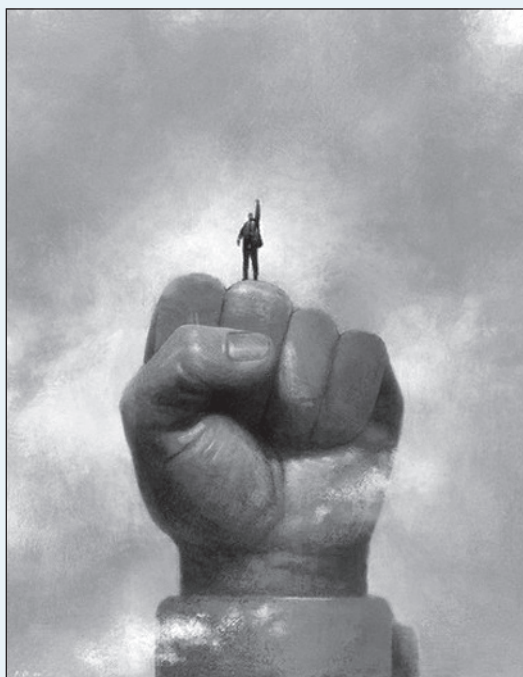
El caso de “Amalia”, una joven con cáncer a quien no se le quería practicar un aborto ni se le aplicaba el tratamiento que requería para su enfermedad, volvió a poner el tema en la agenda de debate nacional. Sin embargo, la CSJ permanece insensible y no termina de resolver los recursos presentados para levantar esa criminal pena en contra de las mujeres.

Trincheras institucionales

Otro acontecimiento que se mantuvo en la agenda nacional fue la reelección de los funcionarios públicos en el CSE, la CSJ, la Contraloría y la Procuraduría de Derechos Humanos. Como se sabe, el 16 de febrero se vencieron los periodos de permanencia de los primeros funcionarios públicos en diferentes instituciones estatales, pero el decretazo del presidente Ortega les dio una trinchera para permanecer en sus puestos y ahí están, incluso dirigiendo elecciones en el CSE. Al respecto, el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, subrayó que si la permanencia en el cargo es ilegal, los actos son ilegales. Sin embargo, nada de eso parece perturbar la pausada rutina de la vida en las trincheras. Por el contrario, hasta salen de sus oficinas para visitar el parlamento a cabildear su reelección, como lo hizo Roberto Rivas.

Pero además, de estos funcionarios, el síndrome del atrincheramiento está presente en todos los ámbitos

de la política y las instituciones con sus inevitables consecuencias. Para todos los funcionarios públicos, sean de primer o tercer nivel, es más importante acomodarse a las rutinas burocráticas y partidarias para mantenerse en los cargos, que ejercerlos con autonomía, integridad e idoneidad el cargo. De esa manera, hemos visto a personas profesionalmente muy capaces, totalmente subordinados y sin poder tomar ni la más pequeña decisión con tal de no con-



trariar las decisiones presidenciales. Eso es especialmente cierto en el gobierno del presidente Ortega.

Una de las novedades de esta dinámica del atrincheramiento son las señales de reciclamiento de los ex militares que ahora ocupan cargos públicos. Si bien es cierto, los militares han desarrollado una serie de capacidades, también es verdad que ya han cumplido su tiempo de servicio y que las condiciones de su retiro son mucho más favorables que cualquier empleado público. En ese sentido, lo más conveniente es que se retiren de verdad y dejen el espacio para la

promoción de jóvenes y nuevos talentos.

Las instituciones en todos sus niveles necesitan de profesionalismo, una burocracia motivada y una renovación sustancial de personal. El estado partido-militar, el estado partido y el estado de amigos, o cualquiera de esas variantes, constituye una pesada lacra de vicios y practicas que han destruido la institucionalidad en cualquiera de las experiencias conocidas. Además, su permanencia casi siempre está acompañada de bajos niveles de control público y rendición de cuentas. Un agregado mortal a la ya difícil situación del país, tal como lo demuestra la secretividad con la que se maneja la declaración de probidad de los altos funcionarios. Durante los últimos tres años, la frontera entre lo público y lo privado terminó de borrarse, a tal punto que la figura de las sociedades anónimas es hoy la marca del sello gubernamental.

Una nueva partidocracia

La degradación de los cargos públicos ha convertido la selección de funcionarios en un mercado persa de transacciones, donde los criterios no están claros ni son iguales para todos. Antes bien, hasta el cargo más insignificante se selecciona a partir de criterios antojadizos, de lealtades políticas partidarias o de cercanía con los grandes líderes. En otras experiencias, el hecho de que la selección de los altos funcionarios sea de carácter político no impide que el proceso se desarrolle de manera clara y objetiva, asegurando que los funcionarios elegidos se desempeñen más adelante con integridad e idoneidad. En el caso de Nicaragua, las denuncias contra funcionarios o las sospechas sobre comportamientos indebidos no suscitan ninguna reacción por parte de los entes controladores o los respon-

sables de su nombramiento, en este caso el parlamento. La impunidad se cubre entonces con el manto de las sociedades anónimas.

Los partidos, liberales y sandinistas, que le dieron vida a este sistema, además de arrastrar otras lacras de la corrupción desde su pasado reciente, ahora han agravado el problema y como si fuera poco, se atrincheraron en el sistema creado y han hecho de él un status quo. Una de sus expresiones más lamentables fue la creación de las superintendencias de servicios públicos, al final del gobierno de Bolaños, que terminaron en un fiasco total y con el lamentable espectáculo de las invasiones a los edificios públicos por parte de los sudorosos funcionarios designados para quedar en nada.

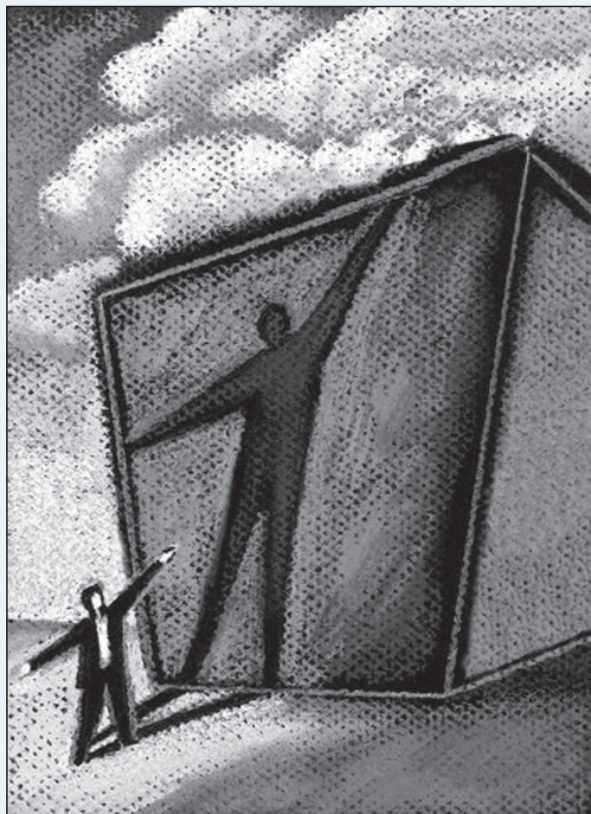
Pero la farsa va a continuar. Los partidos de la sociedad anónima saben que de ella depende su propia promoción y la red de complicidades que permiten el toma y daca de las instituciones públicas, amén de los beneficios personales. Todo intento de penetrar el sistema es rechazado por los partidos sandinista y liberal, y peor aún, han convertido en una misión casi imposible el que los cargos sean desempeñados por personas íntegras y honestas.

Un sistema a su propia medida

A tono con esa voluntad política, Wilfredo Navarro, primer secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional y uno de los principales dirigentes liberales, insistió hace poco en que “no se dejarán chantajear” para la elección de 25 funcionarios del Estado, y llamó “escobas” a los organismos de la sociedad civil que han propuesto candidatos para estos

puestos. “Si quieren elegir, que hagan su partido”, dijo.

En esas declaraciones se refleja claramente la esencia de la partidocracia que se ha atrincherado en el control de las instituciones estatales. En esa perspectiva, los partidos no son un instrumento del régimen para fortalecer la democracia, son el sis-



tema mismo. No reconocen el pluralismo y las diversas formas de representación en una sociedad abierta.

La marcha de las escobas

La marcha de las escobas realizada el 20 de marzo pasado, se convirtió en una de las expresiones simbólicas más fuertes del reclamo planteado por la sociedad civil abierta y pluralista en relación a la no reelección de los magistrados y demás funcionarios públicos. Esta demanda ha profundizado la línea diviso-

ria entre los políticos y el resto de la sociedad nicaragüense. Aunque no contó con la masiva participación de los ciudadanos como la marcha del 21 de noviembre del 2009, los marchistas realizaron su propósito de demostrar su rechazo a la continuidad de los funcionarios públicos.

Los políticos pragmáticos se han alegrado con la disminuida asistencia creyendo que su papel se fortalece y que por fin se van a sacudir a las molestas organizaciones de sociedad civil que últimamente presionan fuertemente para disciplinarlos en defensa de la democracia. Nada más equivocado. Aún si encontraran la fórmula mágica para unirse y ganar las elecciones, no contarían por ello con los mecanismos para recomponer la confianza y la credibilidad de la mayoría de los ciudadanos que se declara sin partidos en el país. Mucho menos, les permitiría retomar la senda democrática.

La verdad que no quieren reconocer es que solamente una verdadera y estratégica alianza con la sociedad civil es el único y mejor camino para democratizar y remoralizar al país. Mientras no reconozcan y acepten que ellos ya no son la única alternativa para la democratización del país, las invocaciones al pueblo dentro del mismo sistema de sociedad anónima y partidocracia, no cambiarán la confianza de los ciudadanos en los partidos y tampoco harán ninguna diferencia en la situación del país. Alemán y Ortega son la prueba fehaciente de ello.

Campañas y candidaturas anticipadas

Urgidos por esta falta de confianza y para mantener el control

del sistema político, tanto el PLC como el FSLN han anticipado el inicio de las campañas y las candidaturas para las elecciones del 2011. En esas urgencias se inscribe las movidas de Alemán procurando desvirtuar cualquier otra posible candidatura liberal y su reciente presentación como candidato para las próximas presidenciales, a “petición del pueblo”. Un político gastado hasta la médula pero viva representación de las ideas y las prácticas de los sectores más autoritarios del país, por mucho que autodefinan como liberales. Con esa postulación anticipada da por sentado que su único rival posible es Daniel Ortega. Como se ve claramente, la sociedad anónima se disputará la gerencia del país.

En este contexto, el reclamo de diferentes grupos de liberales para la realización de elecciones primarias a fin de escoger a los candidatos presidenciales por métodos democráticos, se convierte en una muestra de ingenuidad política o la cobertura piadosa del estado lamentable de los partidos, particularmente los liberales en la oposición. Alemán, al colocar el problema de las candidaturas en el centro de la discusión, busca ocupar la cancha y hacerse pasar como insustituible. Otra manera de atrincherarse.

Mientras tanto, desde el lado oficial ha comenzado a circular un documento de estrategia titulado, “La campaña de la victoria 2010-2011”, con el cual el partido de gobierno abre tempranamente su propia campaña electoral. La visión autocomplaciente que despiden el documento, es de tal magnitud que obliga a preguntarse en qué país se hizo, al negarse a reconocer lo acontecido durante los últimos tres años. No obstante las omisiones, postula claramente el objetivo ganar “hol-



gadamente” las elecciones de 2011; de allí que ponga énfasis en una operación comunicacional para darle al gobierno el respaldo que le falta hoy.

Ambas estrategias están orientadas a tratar de captar los votos del amplio margen de indecisos y ciudadanos sin partido. Pero, por si acaso, dadas las precarias condiciones en que se encuentran las instituciones estatales, especialmente el CSE, el objetivo de ganar las elecciones del 2011 es como atravesar un pantano, por lo tanto, los miembros de la sociedad anónima han optado por vía segura: es decir, contar los votos de antemano. Una victoria espuria como esa, con el agregado de un programa social incluyente y democrático, es la fórmula perfecta para mantener la situación actual: una mezcla de clientelismo, autoritarismo y manipulación institucional.

Volviendo al documento referido, éste afirma que la derecha no tiene proyecto, está desunida y sólo

se basa en el rechazo de Ortega. Y están en lo cierto; sin embargo, esa verdad es cierta en parte debido a que el FSLN se ha convertido en la continuidad del sistema que ambos fabricaron. ¿Cómo lo podrían criticar los liberales?

Un proyecto de país

Pero el hecho de que la derecha no tenga proyecto, no quiere decir que otros actores y la sociedad nicaragüense no tengan aspiraciones y proyectos. Antes bien, el anhelo de una sociedad democrática no es reciente y el deseo de alcanzar ese objetivo no se ha extinguido entre los ciudadanos. Allí hay proyecto para rato y las propuestas no han variado mucho a lo largo del tiempo: sanear las instituciones, tener un CSE honesto e

imparcial, competencias electorales transparentes, respeto al voto ciudadano, pluralismo político, rendición de cuentas de los funcionarios públicos, disminuir la corrupción y desaparecer el estado paralelo.

Abrirle paso a la renovación generacional, asegurar una descentralización participativa y democrática, elaborar un programa económico adecuado a las condiciones del país, asegurar la calidad del gasto público y mejorar la infraestructura del país. Regular a las empresas privadas en la provisión de servicios públicos y proteger a los consumidores.

La lista podría ser más larga, pero no se trata de eso, pues no es una lista de buenos deseos ni una carta de navidad. Se trata de articular un programa para el cual hace falta una fuerza política pluralista, democrática honesta y eficiente, que lo promueva. Una propuesta distinta de la sociedad anónima existente ahora. Una propuesta de la cual, los atrincherados no quieren saber nada.